

TEST DIFÍCIL . BLOQUE 2

1. En el marco del sistema de fuentes del Derecho, ¿qué relevancia jurídica otorga el artículo 1.3 del Código Civil a los denominados "usos jurídicos" que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad?

- a) Tendrán el mismo valor normativo que los reglamentos administrativos locales.
- b) Carecerán de toda validez al no estar tipificados como norma escrita.
- c) Tendrán la consideración legal de costumbre como fuente del Derecho.
- d) Actuarán como principios informadores, pero nunca como norma supletoria.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución, ¿en cuál de los siguientes supuestos requiere el Estado la previa autorización de las Cortes Generales para prestar su consentimiento en un tratado internacional?

- a) Únicamente en tratados que afecten a la estructura interna del Gobierno.
- b) En tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- c) Exclusivamente en convenios relativos a la cooperación técnica en sanidad.
- d) En cualquier acuerdo que suponga una cesión de soberanía a la Unión Europea.

3. El Gobierno decide dictar un Decreto-ley para afrontar una situación de extraordinaria necesidad. Según el artículo 86.1 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes materias podría verse válidamente afectada por esta norma?

- a) El régimen jurídico de las instituciones básicas del Estado.
- b) Los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
- c) El régimen económico y patrimonial de una Entidad de Derecho Público.
- d) Las bases del Derecho electoral general de las Administraciones Públicas.

4. En relación con el principio de competencia normativa, si una norma de rango superior intenta derogar una norma de rango inferior que protege un ámbito competencial exclusivo, ¿qué consecuencia jurídica se deriva según la doctrina administrativa?

- a) La norma superior prevalece siempre en virtud de la jerarquía normativa.
- b) La norma superior es nula por vulnerar el reparto material de competencias.
- c) Ambas normas coexisten, aplicándose la superior solo en caso de contradicción.
- d) La norma inferior queda automáticamente suspendida hasta que el TC resuelva.

5. De acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 40/2015, si una norma atribuye una competencia a una Administración sin especificar el órgano concreto, ¿quién tendrá la facultad de instruir y resolver el expediente?

- a) El órgano superior jerárquico de la Administración para garantizar la objetividad.
- b) Los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.
- c) El Director General del departamento ministerial que sea competente por materia.
- d) El órgano consultivo de mayor rango dentro de la estructura administrativa.

6. Según el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes materias NO es susceptible de delegación de competencias en ningún caso?

- a) Los actos dictados en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
- b) La adopción de resoluciones que pongan fin a la vía administrativa.
- c) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado.
- d) La firma de acuerdos de terminación convencional en procedimientos de responsabilidad.

7. En relación con el acuerdo de avocación regulado en el artículo 10 de la Ley 40/2015, señale la afirmación correcta respecto a su impugnación:

- a) Cabe interponer recurso de alzada independiente contra el acuerdo de avocación.
- b) Solo puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional por invasión de funciones.
- c) Contra el acuerdo no cabe recurso, pero puede impugnarse con la resolución final.
- d) La avocación no es impugnable en ningún caso al ser un acto de trámite interno.

8. Un órgano administrativo pretende realizar una delegación de firma según el artículo 12 de la Ley 40/2015. ¿En cuál de los siguientes casos estaría prohibida dicha delegación?

- a) En las propuestas de resolución de los procedimientos de subvenciones.
- b) En las resoluciones de carácter sancionador dictadas por el órgano competente.
- c) En los actos de trámite que no tengan carácter vinculante para el interesado.
- d) En las comunicaciones oficiales dirigidas a otras Administraciones Públicas.

9. Conforme al artículo 23.4 de la Ley 40/2015, ¿qué consecuencia jurídica tiene la intervención de una autoridad o empleado público en un procedimiento administrativo habiendo concurrido causa de abstención?

- a) Produce necesariamente la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones.
- b) Determina la anulabilidad de los actos, salvo que la causa sea de parentesco.
- c) No implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
- d) Solo afecta a la validez si el interesado planteó la recusación antes del inicio.

10. En el marco de la gestión de documentos electrónicos (Art. 46.2 Ley 40/2015), las Administraciones deben asegurar el traslado de datos a otros formatos para garantizar el acceso. ¿Cómo se denomina técnicamente este proceso de preservación?

- a) Compresión de datos.
- b) Indexación de metadatos.
- c) Migración de datos.
- d) Virtualización de archivos.

11. El artículo 38.3 de la Ley 40/2015 establece que en la determinación de las condiciones de creación de una sede electrónica se debe garantizar un principio específico. ¿De cuál se trata?

- a) Gratuidad total de los servicios de identificación.
- b) Neutralidad tecnológica e interoperabilidad.
- c) Exclusividad del software de código abierto.
- d) Presencialidad mínima para trámites de especial complejidad.

12. Según lo establecido en el artículo 3.c) de la Ley 39/2015, sobre la capacidad de obrar, los grupos de afectados o entidades sin personalidad jurídica:

- a) Gozan de capacidad de obrar universal en cualquier procedimiento administrativo.
- b) Solo pueden actuar a través de un representante que sea abogado colegiado.
- c) Tendrán capacidad cuando la Ley así lo declare expresamente para un caso.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta conforme a lo establecido en la citada Ley.

13. De acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley 39/2015, en relación con los sistemas de identificación electrónica basados en certificados, ¿qué requisito de ubicación geográfica es obligatorio para los recursos técnicos que gestionen categorías especiales de datos?

- a) Deben encontrarse situados necesariamente en territorio de la Unión Europea.
- b) Deben estar ubicados obligatoriamente en territorio español.
- c) Pueden situarse en cualquier país que forme parte de la OCDE.
- d) Es suficiente con que el servidor principal esté en un Estado miembro de la UE.

14. El artículo 21.4 de la Ley 39/2015 impone el deber de informar sobre el plazo máximo de resolución. Si el procedimiento se inicia a solicitud del interesado, ¿dentro de qué plazo debe dirigirse esta comunicación?

- a) Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud por el órgano competente.
- b) En el plazo máximo de quince días desde que la solicitud tuvo entrada en cualquier registro.
- c) No existe un plazo específico de comunicación, siempre que se haga antes de la instrucción.
- d) En el momento de la publicación de la resolución definitiva en el boletín oficial.

15. Un interesado recibe una notificación el día 31 de agosto en un procedimiento donde el plazo se computa por meses. Según el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, si el mes de vencimiento no tiene día equivalente, ¿cuándo expira el plazo?

- a) El primer día hábil del mes de octubre inmediatamente posterior.
- b) El día equivalente al de la notificación del mes siguiente al de vencimiento.
- c) Se entiende que el plazo expira el último día de dicho mes de vencimiento.
- d) El plazo se prorroga automáticamente por diez días naturales adicionales.

16. Según el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, la Administración dicta un acto administrativo en el ejercicio de potestades discrecionales. ¿Cuál es el requisito de motivación exigido para su validez?

- a) No requiere motivación al tratarse de una facultad de libre apreciación del órgano.
- b) Basta con una referencia genérica al interés público perseguido por la Administración.
- c) Debe incluir una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.
- d) Requiere un informe previo y vinculante del Consejo de Estado sobre la oportunidad.

17. Conforme al artículo 46 de la Ley 39/2015, si el órgano competente estima que la publicación íntegra de un acto lesiona derechos legítimos, ¿cómo debe proceder para cumplir con el deber de publicidad?

- a) Deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de publicación o anuncio oficial.
- b) Realizará una indicación somera del contenido y señalará el lugar de comparecencia.
- c) Publicará el acto de forma íntegra pero únicamente en el tablón físico de edictos.
- d) Solicitará autorización previa al interesado para omitir los datos que este considere.

18. En relación con la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas (reglamentos) prevista en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, señale el supuesto correcto:

- a) Solo son nulas las que vulneren la Constitución, siendo las demás anulables.
- b) Son nulas las que vulneren la jerarquía de las disposiciones administrativas superiores.
- c) La vulneración de una Ley ordinaria por un reglamento solo determina su anulabilidad.
- d) Únicamente las disposiciones dictadas por órganos locales pueden ser declaradas nulas.

19. El artículo 52.3 de la Ley 39/2015 regula la convalidación de actos por el vicio de incompetencia jerárquica. ¿Qué órgano tiene la potestad de realizar dicha convalidación?

- a) El mismo órgano que dictó el acto, una vez transcurrido el plazo de un mes.
- b) El órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- c) El titular del Departamento Ministerial al que esté adscrito el órgano incompetente.
- d) No cabe la convalidación en casos de incompetencia, solo la revisión de oficio.

20. Según lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común sobre los efectos de la caducidad (Art. 95.3 LPACAP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La declaración de caducidad produce por sí misma la prescripción de la infracción.
- b) No producirá la prescripción de las acciones de la Administración o de los particulares.
- c) Impide que la Administración pueda iniciar un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto.
- d) Los procedimientos caducados interrumpen el plazo de prescripción en todo caso.

21. En los casos de responsabilidad patrimonial por anulación de un acto en vía administrativa, ¿desde qué momento se inicia el cómputo del año de prescripción según el artículo 67 de la Ley 39/2015?

- a) Desde que se produjo el daño efectivo, con independencia de la fecha de la anulación.
- b) A partir de la notificación de la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- c) Desde que el interesado tuvo conocimiento de la irregularidad del acto anulado.
- d) Transcurridos seis meses desde la firmeza del acuerdo de iniciación del expediente.

22. Cuando la Administración declara la inexactitud de una declaración responsable, el artículo 69.4 de la Ley 39/2015 prevé que la resolución pueda imponer al interesado:

- a) El pago de una sanción económica equivalente al doble de la tasa devengada.
- b) La obligación de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de actividad.
- c) La prohibición de volver a realizar cualquier actividad comercial durante cinco años.
- d) La subsanación obligatoria del documento en el plazo improrrogable de dos días.

23. Respecto al orden de despacho de los expedientes administrativos regulado en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, ¿quién es el responsable directo de su cumplimiento?

- a) El personal administrativo de nivel C2 encargado del registro de entrada.
- b) El titular de la unidad administrativa que tenga a su cargo el despacho de los asuntos.
- c) El Director General del área, independientemente de quién tramite el expediente.
- d) Únicamente el Secretario General de la Administración actuante por su función fedataria.

24. Conforme al artículo 76.2 de la Ley 39/2015, ¿en qué momento pueden los interesados alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización?

- a) Únicamente en el recurso administrativo que se interponga contra la resolución final.
- b) En cualquier momento del procedimiento para su consideración en la resolución.
- c) Exclusivamente durante el trámite de audiencia, bajo pena de preclusión del derecho.
- d) Solo si los defectos causan indefensión y han sido ratificados por el Defensor del Pueblo.

25. En relación con los gastos derivados de la práctica de la prueba (Art. 78.3 LPACAP), ¿en qué supuesto puede la Administración exigir el anticipo de los mismos a reserva de liquidación definitiva?

- a) Únicamente cuando la prueba sea propuesta por la propia Administración para verificar hechos alegados.
- b) En las pruebas propuestas por los interesados cuyos gastos no deba soportar legalmente la Administración.
- c) Exclusivamente en procedimientos de responsabilidad patrimonial superiores a 50.000 euros.
- d) Siempre que la realización de la prueba técnica deba ser subcontratada a un laboratorio privado externo.

26. Cuando el órgano competente acuerde la realización de actuaciones complementarias antes de dictar resolución (Art. 87 LPACAP), ¿qué efecto produce esta decisión sobre el plazo para resolver?

- a) El plazo para resolver continuará computándose, debiendo finalizarse la prueba en siete días naturales.
- b) Produce la interrupción definitiva del procedimiento, debiendo iniciarse un nuevo expediente acumulado.
- c) El plazo para resolver quedará suspendido hasta la terminación de las citadas actuaciones complementarias.
- d) Solo suspenderá el plazo si el interesado manifiesta su oposición expresa al acuerdo motivado del órgano.

27. Según el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, si una resolución sancionadora es ejecutiva en vía administrativa, ¿puede suspenderse cautelarmente por la propia Administración?

- a) No, la suspensión solo puede ser acordada por el órgano judicial tras la interposición formal del recurso.
- b) Sí, siempre que el interesado manifieste su intención de interponer recurso contencioso contra la resolución.
- c) Solo si el sancionado acredita que la ejecución le causaría un daño moral de imposible reparación pecuniaria.
- d) Únicamente si el importe de la sanción es depositado en concepto de aval bancario ante la Tesorería General.

28. El artículo 95.4 de la Ley 39/2015 establece una excepción a la declaración de caducidad por paralización imputable al interesado. ¿En qué supuesto podrá la Administración NO aplicar dicha caducidad?

- a) Cuando el procedimiento sea de naturaleza sancionadora y el presunto infractor sea una persona jurídica.
- b) Si el interesado acredita que la paralización se debió a una incidencia técnica grave en su firma electrónica.
- c) Cuando la cuestión suscitada afecte al interés general o sea conveniente sustanciarla para su definición.
- d) Siempre que el plazo de paralización sea inferior a seis meses y existan terceros interesados personados.

29. Conforme al artículo 105 de la Ley 39/2015, ¿es admisible la interposición de acciones posesorias (interdictos) contra las actuaciones de los órganos administrativos?

- a) Sí, siempre que la actuación material de ejecución no haya sido notificada previamente al interesado.
- b) No se admitirán si la Administración actúa en materia de su competencia y según el procedimiento legal.
- c) Únicamente son admisibles ante el orden jurisdiccional civil cuando afecten a bienes de dominio público.
- d) Solo si se fundamentan en la falta de título ejecutivo de la resolución que autoriza la entrada en el domicilio.

30. A efectos de la Ley 9/2017 (LCSP), ¿cuál de los siguientes requisitos define legalmente a una fundación como integrante del "sector público"?

- a) Que su patrimonio neto sea superior a tres millones de euros en el momento de la aprobación de sus cuentas.
- b) Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público.
- c) Que el 40% de sus ingresos anuales provengan de ayudas de la Unión Europea para fines de investigación.
- d) Que haya sido creada mediante un Real Decreto aprobado expresamente por el Consejo de Ministros.

31. Según la definición de contrato de concesión de obras (Art. 14.4 LCSP), ¿qué elemento es determinante para calificar la transferencia del riesgo operacional al concesionario?

- a) La garantía por parte de la Administración de que el concesionario recuperará siempre las inversiones realizadas.
- b) Que no se garantice que el concesionario vaya a recuperar las inversiones ni los costes en condiciones normales.
- c) La obligación del concesionario de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra el lucro cesante.
- d) Que el canon que deba pagar el usuario sea fijado anualmente por la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

32. En el marco de los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), el artículo 19 de la LCSP establece exclusiones específicas. ¿Cuál de estos servicios jurídicos queda EXCLUIDO de dicha regulación?

- a) El asesoramiento legal externo para la redacción de pliegos de cláusulas administrativas particulares.
- b) La defensa jurídica de la Administración por un abogado en un procedimiento de arbitraje o conciliación.
- c) La gestión integral de expedientes sancionadores en materia de tráfico delegada en una empresa privada.
- d) Cualquier servicio de consultoría jurídica cuyo valor estimado sea inferior al umbral de 215.000 euros.

33. De acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 9/2017, los órganos de contratación deben designar a un responsable del contrato. ¿Cuál es su función técnica primordial?

- a) Firmar el acta de recepción de las obras en representación de la Intervención General de la Generalitat.
- b) Supervisar la ejecución del contrato y dictar las instrucciones necesarias para asegurar su correcta realización.
- c) Aprobar las modificaciones del contrato cuando estas supongan un incremento del precio superior al 10%.
- d) Validar las facturas electrónicas de los subcontratistas antes de que se proceda al pago al contratista principal.

34. En relación con la publicidad de las licitaciones (Art. 136.2 LCSP), ¿cuándo se considera que una modificación de los pliegos es "significativa", obligando a ampliar el plazo de ofertas?

- a) Únicamente cuando afecte al diseño gráfico de los anexos técnicos o a la fuente utilizada en el documento.
- b) Cuando afecte a la clasificación requerida, al objeto, al importe o a las obligaciones del adjudicatario.
- c) Siempre que el presupuesto base de licitación se incremente en una cuantía superior a los 15.000 euros.
- d) Solo si la modificación se produce en los últimos tres días hábiles del plazo inicial de presentación de ofertas.

35. Según el artículo 145.4 de la LCSP, en los contratos de servicios que tengan carácter intelectual, ¿qué peso mínimo deben tener los criterios de calidad en la valoración de ofertas?

- a) No podrán representar menos del 25 por ciento de la puntuación total de los criterios de adjudicación.
- b) Deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación total de los criterios de adjudicación.
- c) El precio debe ser siempre el único criterio de valoración, salvo que el Rector decida incluir otros secundarios.
- d) Los criterios de calidad son facultativos, pudiendo el órgano de contratación eliminarlos si justifica la urgencia.

36. Conforme al artículo 148.1 de la LCSP, el cálculo del coste del ciclo de vida de un producto o servicio debe incluir, en la medida que sean pertinentes:

- a) Exclusivamente el precio de adquisición y los impuestos indirectos que no sean legalmente recuperables.
- b) Los costes soportados por la Administración, pero prohibiendo expresamente la valoración de externalidades.
- c) Costes de adquisición, utilización, mantenimiento y de final de vida (como el transporte o desmantelamiento).
- d) Únicamente los gastos financieros derivados de la suscripción del préstamo necesario para financiar la obra.

HOJA DE SOLUCIONES Y JUSTIFICACIONES

Nº	Solución	Justificación Técnica
1	C	El Art. 1.3 del CC establece que los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos tendrán la consideración de costumbre.
2	B	El Art. 94.1.d) de la Constitución exige autorización de las Cortes para tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
3	C	El Art. 86.1 CE prohíbe afectar a instituciones básicas o derechos del Título I; el régimen de una Entidad de Derecho Público es materia permitida.
4	B	Según la doctrina de fuentes, el principio de competencia anula la norma que invade un ámbito exclusivo, independientemente de su rango.
5	B	El Art. 8.3 de la Ley 40/2015 establece que, ante falta de especificación, la competencia recae en los órganos inferiores por materia y territorio.
6	C	El Art. 9.2.a) de la Ley 40/2015 prohíbe taxativamente la delegación de competencias en asuntos relativos a las relaciones con la Jefatura del Estado.
7	C	El Art. 10.2 de la Ley 40/2015 dispone que contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso contra la resolución.
8	B	El Art. 12.1 de la Ley 40/2015 establece que no se podrá delegar la firma en resoluciones de carácter sancionador.
9	C	El Art. 23.4 de la Ley 40/2015 determina que la actuación de quien debió abstenerse no implica necesariamente la invalidez de los actos.
10	C	El Art. 46.2 de la Ley 40/2015 obliga a las Administraciones a asegurar la conservación mediante la migración de datos para garantizar el acceso.
11	B	El Art. 38.3 de la Ley 40/2015 impone que las sedes electrónicas deben garantizar los principios de neutralidad tecnológica e interoperabilidad.
12	C	El Art. 3.c) de la Ley 39/2015 supedita la capacidad de obrar de grupos sin personalidad a que una Ley lo declare así expresamente.
13	B	El Art. 9.3 de la Ley 39/2015 exige que los recursos técnicos para gestionar categorías especiales de datos se ubiquen en territorio español.
14	A	El Art. 21.4 de la Ley 39/2015 obliga a comunicar el plazo máximo y efectos del silencio en los 10 días siguientes a la recepción de la solicitud.
15	C	El Art. 30.4 de la Ley 39/2015 indica que si el mes de vencimiento no tiene día equivalente al del inicio, el plazo expira el último día del mes.
16	C	El Art. 35.1.i) de la Ley 39/2015 exige motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos para actos dictados en potestad discrecional.
17	B	El Art. 46 de la Ley 39/2015 establece que si la publicación lesiona derechos, se hará una indicación somera y se señalará el lugar de consulta.
18	B	El Art. 47.2 de la Ley 39/2015 declara nulas las disposiciones que vulneren la jerarquía de otras de rango superior.
19	B	El Art. 52.3 de la Ley 39/2015 permite la convalidación del vicio de incompetencia jerárquica por el órgano superior del que dictó el acto.
20	B	El Art. 95.3 de la Ley 39/2015 aclara que la caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones administrativas o de particulares.
21	B	El Art. 67 de la Ley 39/2015 establece que el año para reclamar cuenta desde la notificación de la resolución o sentencia que acuerde la anulación.

22	B	El Art. 69.4 de la Ley 39/2015 prevé que la resolución que declare la inexactitud pueda obligar a restituir la situación jurídica al momento inicial.
23	B	El Art. 71.2 de la Ley 39/2015 atribuye la responsabilidad del cumplimiento del orden de despacho al titular de la unidad administrativa.
24	B	El Art. 76.2 de la Ley 39/2015 permite a los interesados alegar defectos de tramitación en cualquier momento para su consideración en la resolución.
25	B	El Art. 78.3 de la Ley 39/2015 permite exigir el anticipo de gastos solo en pruebas propuestas por interesados cuyos costes no deba sufrir la Administración.
26	C	El Art. 87 de la Ley 39/2015 determina que el acuerdo de realizar actuaciones complementarias suspende el plazo para resolver hasta su terminación.
27	B	El Art. 90.3 de la Ley 39/2015 permite la suspensión cautelar si el interesado comunica su intención de interponer recurso contencioso.
28	C	El Art. 95.4 de la Ley 39/2015 faculta a no declarar la caducidad si la cuestión afecta al interés general o conviene sustanciarla para su definición.
29	B	El Art. 105 de la Ley 39/2015 prohíbe interponer acciones posesorias contra actos dictados en materia de competencia y conforme a procedimiento.
30	B	El Art. 3.1.e) de la Ley 9/2017 define como fundación pública aquella donde el sector público ostenta la mayoría de derechos de voto en el patronato.
31	B	El Art. 14.4 de la Ley 9/2017 especifica que hay riesgo operacional cuando no se garantiza la recuperación de la inversión en condiciones normales.
32	B	El Art. 19.2.e) de la Ley 9/2017 excluye expresamente de regulación armonizada la defensa jurídica en arbitrajes, conciliaciones o ante tribunales.
33	B	El Art. 62.1 de la Ley 9/2017 encomienda al responsable del contrato la supervisión de la ejecución y el dictado de instrucciones al contratista.
34	B	El Art. 136.2 de la Ley 9/2017 califica como significativa la modificación que afecte al objeto, importe, plazo o clasificación requerida.
35	B	El Art. 145.4 de la Ley 9/2017 exige que en servicios intelectuales los criterios de calidad representen al menos el 51% de la puntuación total.
36	C	El Art. 148.1 de la Ley 9/2017 define que el ciclo de vida incluye costes de adquisición, utilización, mantenimiento y final de vida (transporte/desmantelamiento).